

REVISTA CIDOB d'AFERS INTERNACIONALS 79-80.

La política árabe y mediterránea de España.

**España y el Sáhara Occidental: la dimensión partidista.
Jordi Vaquer i Fanés.**

España y el Sáhara Occidental: la dimensión partidista

Jordi Vaquer i Fanés*

RESUMEN

Desde la apresurada retirada del Ejército español del Sáhara Occidental en 1975, los dos partidos mayoritarios en la democracia española han diferido respecto a la postura a adoptar sobre la cuestión del Sáhara. La propuesta de este artículo es establecer hasta qué punto ello es resultado de las lógicas opuestas de gobierno/oposición y hasta qué punto responde a posturas propias de los partidos, analizando la evolución de sus posicionamientos con respecto a la cuestión saharauí. La hipótesis es que la posición de los partidos españoles respecto a Argelia y Marruecos venía inicialmente muy condicionada por su visión de la cuestión del Sáhara, pero esta causalidad tiende a invertirse. Así, en la actualidad, las posturas enfrentadas en la cuestión saharauí serían mayormente el resultado de visiones distintas sobre los intereses de España en el Magreb y, sobre todo, de opciones diferentes sobre a qué país, Marruecos o Argelia, hay que privilegiar en la relación bilateral.

Palabras clave: España, Sáhara Occidental, Argelia, Marruecos, política exterior

La política exterior española, después de una larga etapa de europeización y de normalización del papel internacional de España, entró con el cambio de siglo en una fase de politización y de cuestionamiento de los consensos básicos (Aixalà, 2005). Esta fase ha afectado a elementos fundamentales de la identidad exterior de España. Sin embargo, esta tendencia general no debe hacernos olvidar que en la España de la transición hubo también grandes desacuerdos (como el debate sobre la entrada en la OTAN) y cuestiones

*Coordinador del Programa Europa de la Fundación CIDOB
jvaquer@cidob.org

que tradicionalmente suscitaron el enfrentamiento entre partidos. La actitud a adoptar hacia el contencioso del Sáhara Occidental fue y sigue siendo uno de esos temas, recurrente en el escenario político y presente en la competición partidista desde 1975.

No se puede hablar de la política de España hacia el Magreb árabe sin conocer su posición respecto al Sáhara Occidental por tres razones. La primera, porque las dinámicas regionales y las relaciones entre estados de esa región están enormemente condicionadas por ese conflicto desde hace más de 30 años. La segunda, porque España está directamente implicada en el conflicto desde su génesis, y por poderosas razones (de responsabilidad en la descolonización, de proximidad geográfica, de implicación de la opinión pública, de relaciones con las partes contendientes, etc.) no puede ignorar su existencia o desentenderse de su solución. Por último, porque la dinámica partidista y la política magrebí de los sucesivos gobiernos han tenido el conflicto saharauí como referente permanente en el debate político interno.

El presente artículo explora esta tercera razón. Tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, los partidos políticos españoles han debatido ampliamente la cuestión del Sáhara, y la han usado principalmente como arma para hacer oposición. Los partidos minoritarios han seguido una línea bastante regular, con una moderación progresiva del discurso pero sin abandonar ni sus simpatías ni su interés por la cuestión. En cambio, los dos partidos que han llegado a gobernar han cambiado sus posturas considerablemente. Así, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue abanderado de la causa saharauí y aliado declarado del Frente Polisario, es percibido hoy en día como el más promarroquí de los partidos españoles; el Partido Popular (PP), en cambio, heredero de formaciones de derecha que aborrecían al régimen argelino en los años setenta y criticaron al Polisario desde su nacimiento, es hoy un partido crítico con Marruecos y defensor de una mejor relación con Argelia. En los párrafos que siguen vamos a analizar cómo y por qué sucedió este cambio de posiciones a lo largo de los últimos treinta años, y extraer algunas conclusiones sobre la posición actual de estos partidos políticos y su influencia en la política exterior de España.

LA MARCHA VERDE Y LOS PRIMEROS POSICIONAMIENTOS

El día 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde cruzaba la frontera entre Marruecos y el entonces Sáhara español, y daba inicio a un conflicto que ha marcado la agenda política exterior española desde entonces. Decenas de miles de personas, civiles en el oeste y soldados en el este, cruzaron la línea, haciendo una presión insoportable para un

régimen paralizado por la agonía de Francisco Franco. Los altos cargos de la dictadura franquista, incapaces de tomar una acción firme, disuadidos por el tácito apoyo francés y estadounidense al gesto marroquí¹, e indispuestos al uso de la fuerza en un delicado momento político, entraron en una negociación con Marruecos y Mauritania, que desembocó en los Acuerdos Tripartitos de Madrid. En virtud de dichos acuerdos, España renunció a descolonizar el territorio según los parámetros establecidos por Naciones Unidas y transfirió sus responsabilidades a una administración conjunta de Marruecos, Mauritania y la *Yamaa*, la asamblea tribal del Sáhara Occidental, abriendo el camino a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de sus dos vecinos. En ese mismo momento se inició una larga guerra de resistencia por parte del Frente para la Liberación de Saguiat al Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario.

La Marcha Verde y el Tratado de Madrid (10 de noviembre de 1975) fueron probablemente el mayor reto internacional que afrontó España desde el final de la Guerra Civil (Mesa Garrido, 2001: 175). Sucedieron, precisamente, en un momento de crisis aguda del régimen, con el tirano agonizante y con la incertidumbre política sobre el futuro que paralizaba toda decisión. La muerte de Franco diez días después, el 20 de noviembre de 1975, abrió paso a una nueva etapa política que heredaría un envenenado dossier saharauí. En febrero de 1976 salían los últimos soldados españoles del Sáhara, que quedaba repartido en dos tercios para Marruecos y uno para Mauritania. Ese mismo mes el Frente Polisario proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática, con el apoyo del Gobierno de Argel, que la reconoció un mes después. Marruecos reaccionó rompiendo sus relaciones con Argelia.

Las negociaciones de Madrid tuvieron lugar en un ambiente de tensión excepcional, y por ello no hay que interpretar que, a pesar de su resultado muy favorable a Marruecos, los elementos fieles al régimen franquista tuviesen una especial simpatía por ese país o por la monarquía alauí. Desde su independencia en 1956, la relación con Marruecos nunca fue fácil para España, y sus constantes reivindicaciones territoriales, así como sus agresivos medios para conseguir cesiones territoriales (Tarfaya y la zona sur del protectorado español en 1958; Sidi Ifni en 1969), no le habían granjeado ninguna simpatía entre los elementos nacionalistas españoles. Muchos en el Ejército vivieron la apresurada salida del Sáhara como una humillación.

La oposición de izquierdas pronto adoptó una actitud beligerante en esta cuestión: tanto para el PSOE como para el Partido Comunista de España (PCE) la truncada descolonización del Sáhara era un error que se debía enmendar. La izquierda negaba el valor jurídico de los Acuerdos Tripartitos al ir en contra de la legalidad internacional y los principios y pactos asumidos por el Estado español². Esta posición había comenzado desde el mismo momento de la Marcha Verde. Un año después, el 14 de noviembre de 1976, Felipe González visitó los campos de refugiados saharauis en Tinduf, donde prometió que el PSOE estaría con el pueblo saharauí “hasta la victoria final”. En esas

mismas declaraciones, mostró su apuesta por la autodeterminación del pueblo saharauí, su repulsa a los Acuerdos de Madrid y su apoyo al Polisario³.

El apoyo de las fuerzas españolas de izquierda al Frente Polisario después de 1975 contrasta con el relativo aislamiento en que se habían encontrado los jóvenes saharauíes nacionalistas que estudiaron en Canarias y en Madrid entre 1970 y 1973, años de formación del nacionalismo saharauí (López García y Hernando de Larramendi, 2005). Los nacionalistas saharauíes y la oposición democrática española no tenían lazos significativos antes de 1975; Santiago Carrillo, entonces líder del PCE, reconoce que “hasta más tarde no tuvimos conocimiento cabal de la realidad saharauiana y de la existencia de un movimiento propio de liberación, y al estar enterados modificamos nuestra posición y la apoyamos, lo que nos llevó al rompimiento con los comunistas marroquíes”⁴.

Ni la preocupación por la legalidad internacional ni el reconocimiento del derecho de autodeterminación fueron los únicos elementos que inspiraron a la izquierda española, y en particular al PSOE y PCE, a alienar sus posturas con la del Frente Polisario. El propio Felipe González calificó en su discurso del 14 de noviembre de 1976 a los gobiernos marroquí y mauritano de “reaccionarios”, en claro contraste con su positiva percepción del régimen argelino. La identificación ideológica y la influencia argelina fueron decisivas para explicar el apoyo incondicional del PSOE y PCE a las tesis del Frente Polisario, y, por lo tanto, su rechazo radical a los Acuerdos de Madrid (López García y Hernando de Larramendi, 2005). El programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones de 1977 defendía una política de amistad con Argelia en detrimento de Marruecos, en coherencia con los viajes que hicieron tanto Felipe González como Alfonso Guerra en esos años (Morán, 1990: 78; Hernando de Larramendi, 1997: 405).

LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO

Los años en los que Alfonso Suárez encabezó el Gobierno de España fueron cruciales en política exterior: España debía salir de su aislamiento, establecer relaciones con numerosos estados e iniciar el camino de su integración europea. En este contexto, el Magreb era una preocupación secundaria, pero que no podía ser ignorado. En palabras del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja: “La idea central en nuestras relaciones con el Norte de África y el Magreb es, esencialmente, intentar una restauración del equilibrio con los vecinos, en base a una política de neutralidad en sus diferencias y dentro del mantenimiento de los principios en lo que se refiere al tema del Sáhara, y, al mismo tiempo, una colaboración en la contención y en la eliminación de las tensiones” (DSCD COM I-6: 10). El Gobierno mantenía que la responsabilidad

española sobre el Sáhara había acabado el 26 de febrero de 1976, con la retirada de tropas y el anuncio a Naciones Unidas. El proceso de descolonización quedaba así incompleto a la espera de que se produjese la libre determinación del pueblo saharauí; la denuncia de los Acuerdos de Madrid supondría volver a tener unas responsabilidades coloniales que España no debía ni podía asumir (DSCD COM I-6: 11, 28).

Fueron años de una política reactiva, en la cual el Gobierno se encontró a menudo a la defensiva, respondiendo a iniciativas hostiles de Argelia, el Frente Polisario o Marruecos. En palabras de Pérez-Llorca cuando era ministro de Asuntos Exteriores, eran “las partes las que trata[ba]n de influir en la política española [...] mediante cortejo o presión” (DSCD COM I-23: 8). España intentó evitar que alguno de los dos grandes estados alcanzase una situación hegemónica que amenazase a los intereses españoles en la región, y, en particular, a Ceuta, Melilla⁵ y Canarias. Una acción positiva hacia Marruecos o hacia Argelia debía compensarse con otra hacia su rival, como prueba de neutralidad. Esta estrategia acabó teniendo consecuencias negativas: las iniciativas españolas quedaban desacreditadas, el Gobierno quedaba expuesto a amenazas y chantaje por parte de los vecinos del sur, y cada acción española era percibida por uno de los dos estados como poco menos que una traición (Hernando de Larramendi y Núñez Villaverde, 1996: 60; Gillespie, 2000: 30-32).

Pronto emergieron dos ámbitos en los que los contendientes presionarían a España: la cuestión territorial y la pesca⁶. Por parte marroquí, la permanente reivindicación de Ceuta y Melilla se podía activar con mayor intensidad cuando conviniese presionar a España; Argelia, durante un tiempo, apoyó a un movimiento para la independencia de las islas Canarias, reivindicando su africanidad y buscando votos en África para su inclusión en la agenda descolonizadora de Naciones Unidas⁷. En cuanto a la pesca, el medio favorito de presión fueron los apresamientos de buques pesqueros españoles por parte tanto de Marruecos como del Polisario.

En este contexto, el PSOE y el PCE reclamaron al Gobierno la denuncia del acuerdo tripartito y el reconocimiento del Frente Polisario. La oposición de derechas, mientras, exigió al Gobierno que diferenciase entre el Frente Polisario, que en su momento atacó a España, y el pueblo saharauí, cuya autodeterminación había que defender (DSCD COM I-6). En esos años se fragua un cierto consenso en torno a la cuestión del Sáhara —el apoyo a las iniciativas de Naciones Unidas y al derecho de autodeterminación como única salida a la descolonización pendiente— pero se marcan diferencias de estrategia entre una izquierda, y en particular el PSOE, muy próximo al Frente Polisario, y un centro-derecha preocupado por irritar en demasía al vecino marroquí. El tema del Sáhara Occidental domina los debates sobre el Magreb.

La precaria política de equilibrio, de pobres resultados, acabó siendo abandonada por el sucesor de Alfonso Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo. En su discurso de investidura, éste apuesta claramente por dar prioridad a Marruecos y resalta la necesidad de “contar en

nuestra frontera meridional con un Reino de Marruecos estable, próspero y en cordiales relaciones con los demás países del Magreb, igualmente amigos de España” (DSCD P I-143: 9157). Este gesto fue interpretado muy positivamente por Marruecos (Hernando de Larramendi, 1997: 403), y generó enormes suspicacias en Argel, donde además se veía con preocupación la decisión española de ingresar en la OTAN, dados los lazos que unían al régimen argelino con la URSS.

EL SÁHARA, LA POLÍTICA GLOBAL Y EL DESENCANTO DEL POLISARIO Y ARGELIA

Leopoldo Calvo-Sotelo no tuvo mucho tiempo para llevar a cabo su política. El 28 de octubre de 1982, un año y medio después de su agitada investidura (23 de febrero de 1981), España celebró las elecciones generales que llevarían a la izquierda al poder con una mayoría absoluta del PSOE. La victoria socialista desató las alarmas en Rabat, a la vez que Argelia esperaba ver al nuevo Gobierno enderezar el rumbo promarroquí adoptado por el Gobierno de Calvo-Sotelo (Morán, 1990: 78). La llegada de los socialistas al Gobierno marcó un punto de inflexión en su posición hacia el contencioso del Sáhara Occidental. Algunos síntomas de esa inflexión ya se advertían en la campaña electoral de 1982, cuando la victoria electoral parecía posible, en la cual los socialistas empezaron a moderar su discurso para tranquilizar a los marroquíes (Morán, 1990: 78; Hernando de Larramendi 1997: 405-408)⁸.

En el Gobierno, los socialistas actuaron con moderación sorprendente, dadas sus declaraciones y acciones anteriores. Con el Sáhara, como con la cuestión de la OTAN, primó la continuidad, fiabilidad y estabilidad por encima de la ideología del partido. Así, contrariamente a las exigencias anteriores del propio PSOE, el Frente Polisario no recibió apoyo directo de España, no se reconoció a la RASD y, sobre todo, no se denunciaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, tan denostados por los diputados y dirigentes socialistas, con el mismo argumento que dieron los gobiernos de UCD: esos acuerdos estaban ya muertos. A pesar de la fuerte presión argelina, se mantuvo el reconocimiento de la Administración marroquí del territorio, aunque no de su soberanía (Morán, 1990: 83).

Conviene recordar que, en esos momentos, el enfrentamiento militar era mucho más favorable a Marruecos que cinco años antes, la llegada de colonos marroquíes avanzaba a gran ritmo (en 1981 había cuatro marroquíes, entre civiles y militares, por cada nativo saharauí en el Sáhara Occidental), y la mejora económica en el territorio alentaba el optimismo marroquí respecto al resultado de un hipotético referéndum (Del Pino,

1983:126-127). Todo ello había permitido al rey Hassan II retomar la iniciativa diplomática con la aceptación, en junio de 1981, del principio de un referéndum de autodeterminación en la conferencia de la Organización para la Unidad Africana (OUA) de Nairobi. Esa nueva postura marroquí facilitaba las cosas al Gobierno español. Marruecos, además, necesitaba mejorar las relaciones con Madrid ante el enfriamiento de sus lazos con la Administración Mitterrand en Francia (Hernando de Larramendi, 1997: 411).

El Gobierno socialista contextualizó su giro político en la cuestión saharauí y su acercamiento a Marruecos en el marco de lo que se llamó una nueva “política global” hacia el Magreb. Este concepto fue expuesto en 1983 por Fernando Morán, entonces ministro de Asuntos Exteriores: “España está implicada en una política global, no una política de equilibrio; una política de colaboración, no de confrontación, y de no interferencia en los asuntos internos de los otros países” (OID, 1983: 501). Se trataría de compatibilizar, respetando la singularidad de cada Estado magrebí, la defensa de la seguridad de España y de sus intereses económicos y culturales con la promoción de la prosperidad económica y la estabilidad política y social en la región, para alcanzar un Magreb próspero, estable e integrado (Moratinos, 1991). En la práctica, pues, el PSOE en el Gobierno renunciaba completamente a su lenguaje beligerante con Marruecos, sin renunciar a las posturas de principio ya defendidas por el Gobierno Suárez (exigencia de un referéndum de autodeterminación, no reconocimiento de la soberanía marroquí, apoyo a Naciones Unidas).

En la negociación del acuerdo pesquero de 1983, por ejemplo, se incluyeron las aguas del Sáhara Occidental⁹, lo que causó una enérgica reacción del Polisario. Los ataques del Polisario contra pesqueros españoles aumentaron hasta que en septiembre de 1985 el ataque al pesquero *Junquito* y a una patrullera que acudió en su rescate desencadenó una drástica reacción española. Todos los responsables del Frente Polisario en España fueron expulsados y sus oficinas de información, clausuradas. Aunque la postura española en Naciones Unidas no cambió¹⁰, el Polisario, aquel *guía recto* del pueblo saharauí al que había saludado Felipe González en noviembre de 1976, se había convertido ahora en un grupo amenazante y hostil.

La política de los socialistas en el Gobierno también causó gran desilusión en Argel. Al principio los gestos españoles intentaron compensar esa mala impresión: Alfonso Guerra visitó Argel en marzo de 1983, el mismo mes en que González fue a Rabat; les siguieron, dos meses después, los Reyes. Pero la política española hacia el Sáhara y la OTAN generaron reacciones adversas en Argel. Una disputa sobre los términos de los contratos de suministro de gas argelino a España fue elevada a cuestión de Estado; la relación económica y comercial fue empeorando hasta su resolución en 1985 (Marquina, 2000: 535-537). ETA, acosada en Francia por la renovada cooperación franco-española, halló refugio en Argelia, donde ya estaba presente desde mediados de los años setenta (Gillespie 2000: 85-86). El PSOE en el Gobierno perdió su simpatía por el régimen argelino al mismo tiempo que eliminó su animadversión por Marruecos. A la vez que

el ministro Morán expresaba su intención de “no centrar exclusivamente las relaciones con Marruecos en aspectos que podíamos decir contenciosos y territoriales” y de abrir la relación a otras materias (DSCD COM II-11: 20-21), los contenciosos políticos distorsionaban las relaciones con Argelia en ámbitos comerciales y de seguridad interior.

Los años posteriores a 1982 fueron de profunda reestructuración del centro-derecha español. Con el descalabro de la UCD, se abrió el camino al crecimiento de Alianza Popular. Sus líderes reprocharon más a los socialistas las declaraciones hechas antes de llegar al Gobierno que su política, que, al fin y al cabo, en poco se diferenciaba de la del centro-derecha respecto al conflicto del Sáhara. El PCE, en cambio, aprovechó el giro del Gobierno para ocupar el espacio antes cubierto por el PSOE; reclamó el reconocimiento de la RASD y recriminó al Gobierno el abandono del Polisario a favor de una mejor relación con Marruecos. Junto al PCE, la apuesta más decidida por el apoyo al Polisario venía de los partidos nacionalistas, muy minoritarios en la Cámara (DSCD P II-66).

LA APUESTA MULTILATERAL

A pesar de los éxitos parciales conseguidos por la política *global* del Gobierno socialista, como el acuerdo pesquero de 1983, el Magreb y el conflicto del Sáhara nunca dejaron de incomodar a los responsables de la política exterior española. Para la opinión pública española, el Sáhara era un tema sensible, pero no el único: la pesca, la seguridad de Canarias, Ceuta y Melilla, las importaciones agrícolas, el santuario de ETA en Argelia, todas eran cuestiones de primer orden en la agenda política interna. Por ello, la entrada en las Comunidades Europeas fue vista como una oportunidad para quitar hierro a las relaciones con Marruecos y Argelia, usando los instrumentos conjuntos y el peso sumado de los 12 países miembros para evitar el chantaje de los vecinos del sur y defender los intereses españoles. En otro trabajo hemos examinado el fracaso de esta estrategia: defender intereses españoles contradictorios elevándolos al ámbito europeo no resultó ser una solución definitiva a los problemas españoles con sus vecinos del sur, sino una política europea igualmente contradictoria, y sólo parcialmente efectiva (Vaquer i Fanés, 2004a). Sin embargo, los marcos multilaterales, y en especial Naciones Unidas, eran el espacio de encuentro entre todas las fuerzas políticas referente al Sáhara. El Gobierno español, seguido de cerca por la oposición parlamentaria y la opinión pública, y a la vez fuertemente presionado por Marruecos y Argelia, difícilmente hubiese podido tomar una iniciativa propia. Pero los progresos que hizo la ONU a partir de mediados de los ochenta permitían tener una postura clara, de apoyo a las iniciativas del secretario general, y aceptable para todos los actores implicados interna y externamente. Esto permitió que el conflicto

saharai dejase de ser la cuestión primera en las relaciones tanto con Argelia como con Marruecos, lo cual repercutió en una mejora sustancial de las relaciones con ambos.

Conviene recordar, sin embargo, que a mediados de los ochenta las organizaciones de apoyo a los saharais estaban muy consolidadas y tenían una creciente influencia en parlamentos y opiniones públicas de toda Europa y, sobre todo, en España (de Saint Maurice, 2000). Por ello, y para contentar a sus propias bases, el Gobierno necesitaba una vía de acción, que encontró en el seno de la Unión Europea. El acuerdo de Marruecos y el Frente Polisario con el Plan Pérez de Cuellar (1988) permitió a España abrir el debate sobre la cuestión, y conseguir así una declaración de los 12 a favor de los esfuerzos de Naciones Unidas, que incluían la previsión de un referéndum¹¹. No sólo el Gobierno llevó la cuestión al ámbito europeo: los europarlamentarios españoles fueron el revulsivo imprescindible para que el Parlamento europeo se convirtiese en la institución europea más abiertamente prosaharai (Urruela, 1995; Vaquer i Fanés, 2004b).

A medida que el debate era menos frecuente e intenso en el Parlamento español, el activismo de los eurodiputados (y de los diputados autonómicos y de los ayuntamientos españoles) crecía. En el caso de las negociaciones pesqueras, las concesiones a Marruecos en cuanto a la cuestión de su control sobre aguas saharais fueron mayores en el acuerdo UE-Marruecos de 1988 que en los anteriores firmados por España (Juste Ruiz, 1988); pero esta vez (como pasaría con los acuerdos de 1992, 1995 y 2007) las críticas por esa cuestión se las llevaría la Comisión Europea en el Parlamento Europeo, mientras el debate en el Congreso de los Diputados se centraba en las ventajas y desventajas para el sector pesquero. Tanto a los gobiernos de Felipe González como al propio PSOE les convenía esta situación de gran activismo socialista en el Parlamento de Estrasburgo y en los ámbitos local y regional; ello permitía contentar a una militancia y cuadros medios abiertamente prosaharais, así como salvar la cara ante la opinión pública, sin comprometer a la vez la buena relación con Marruecos.

La tensión entre el PSOE y Marruecos desapareció en poco menos de un año, el primero del Gobierno de Felipe González. A ese cambio le siguió un desencanto mutuo con Argelia, a la cual, sin embargo, los gobiernos socialistas jamás dejaron de intentar convencer de las virtudes de una buena relación bilateral, siguiendo el guión de su política *global* hacia el Magreb. La relación mejoró a medida que se producían progresos en Naciones Unidas en el dossier saharai, se diluía la alianza soviético-argelina y se distendía la relación entre Argel y Rabat. La relación con Argelia llegó a finales de los ochenta habiendo perdido el tinte ideológico que la marcó en los años setenta, y habiéndose desactivado algunos de los contenciosos más graves (apoyo a la independencia canaria, santuario de ETA, contratos del gas). Aun así, apenas se podía reconocer en aquel gobierno al PSOE proargelino y antimarroquí de diez años antes. El precio, en buena parte, fue la renuncia a las exigencias más radicales que se habían formulado en cuanto al Sáhara Occidental: la denuncia de los Acuerdos de Madrid, el apoyo al Polisario y el reconocimiento de la RASD.

La entrada en los años noventa vino marcada por la caída del Telón de Acero, y por un nuevo liderazgo español para atraer la atención de sus socios comunitarios hacia el sur en un momento de protagonismo de Europa del Este (Barbé, 1996). En el primer lustro de los noventa, España ganó peso diplomático en la relación con los países árabes, hasta culminar en la Conferencia de Barcelona (noviembre de 1995) que supuso el nacimiento del Partenariado Euromediterráneo. En ese contexto, la Administración socialista española, enormemente debilitada en el plano interno, intentó sacar el máximo rédito y presentarse como la defensora de los intereses del Sur en la Unión Europea. Este mensaje sólo podía tener un eco limitado en un Marruecos irritado por la dureza de las condiciones impuestas por la parte europea, principalmente a instancias de España, en los acuerdos pesquero y de asociación de 1995, y en una Argelia que se sintió abandonada por Europa en pleno conflicto civil. Los límites de la política *global* hacia el Magreb y del uso de las instituciones multilaterales para resolver problemas bilaterales se revelaban de modo diáfano, pero era indiscutible que el PSOE había sabido superar una orientación ideológica en la política exterior y evitar un enfrentamiento partidista en España en relación con los asuntos del Magreb.

EL DESENCUENTRO ENTRE EL PP Y MARRUECOS

El PP, que llegó al poder en 1996 con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos de centro-derecha, no parecía, ni para Marruecos ni para Argelia, especialmente amenazante. La dureza exhibida hacia Marruecos en los debates relativos a los acuerdos, en especial durante y después de las negociaciones del acuerdo pesquero de 1995, no parecía ir más allá de la tensión propia de la dinámica Gobierno-oposición, y la retórica sobre la soberanía española sobre Ceuta y Melilla no era más radical que la adoptada por los propios socialistas. El PP tenía contactos en Marruecos con el Istiqlal (partido nacionalista de centro-derecha); algunos de sus líderes (como Manuel Fraga) habían criticado duramente en el pasado al Frente Polisario, y alcanzó el Gobierno con el apoyo de CiU, cuyo gobierno en la Generalitat de Catalunya se mostraba relativamente frío con los movimientos prosaharais y dispuesto a tener una buena relación con el Gobierno de Marruecos. Su llegada al poder no era, a priori, una mala noticia para Rabat, donde estaba todavía vivo el rencor por la dureza negociadora y el resultado desfavorable en el acuerdo comercial y de pesca con la Unión Europea, achacados a la intransigencia del Gobierno socialista español. José María Aznar, como había hecho anteriormente Felipe González, eligió Marruecos como primer destino exterior en calidad de presidente del Gobierno.

Los factores que llevaron a un deterioramiento de la relación con Marruecos durante el primer Gobierno de Aznar (1996-2000) son varios. Algunos tuvieron relación con acontecimientos y decisiones como la llegada de inmigrantes en pateras salidas de Marruecos y del Sáhara Occidental, así como con la creación de un sistema de vallas de alta seguridad alrededor de Ceuta y Melilla. Otros tuvieron un componente simbólico importante como la visita del presidente del Gobierno a Ceuta y Melilla en enero de 2000 o la escasez de visitas oficiales¹². La escalada de tensión tuvo lugar con el segundo Gobierno de Aznar. En el año 2000, que ya fue complicado en el plano bilateral¹³, la cuestión saharauí se reactivó con la presentación del Plan Baker I, que preveía una amplia autonomía saharauí bajo soberanía marroquí. El Plan, apoyado por Francia, Estados Unidos y Reino Unido y rechazado por el Frente Polisario y Argelia, no fue apoyado por España, hecho que causó la hostilidad marroquí. En abril de 2001, al romperse las negociaciones para el acuerdo de pesca, José María Aznar dijo en unas declaraciones que “habrá consecuencias en las relaciones entre Marruecos y España por la inaceptable actitud del país vecino” (*El País*, 26 abril 2001). En un verano de llegadas sin precedentes de pateras, los altos cargos de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores hicieron duras declaraciones acusando al Gobierno marroquí de ineficiencia, a las cuales se sumaron las posturas intransigentes del Ministerio de Agricultura en cuanto a los acuerdos agrícolas UE-Marruecos, en pleno proceso de revisión. Una oleada de artículos críticos junto con la falta de avances en las reformas impulsadas por el nuevo rey Mohamed VI en los principales periódicos españoles acabaron de deteriorar el clima bilateral¹⁴. Durante los días 19, 20 y 21 de octubre, la Plataforma Cívica Andaluza de Apoyo al Referéndum del Sáhara organizó un referéndum en todo el territorio andaluz y consiguió 125.000 *votos* y 150.000 firmas, además de instalar incluso una *mesa electoral* en el Parlamento andaluz (25 octubre) a instancias del intergrupo parlamentario Paz para el Sáhara. A pesar de que el PSOE no estaba entre los convocantes, el apoyo de numerosas instituciones en las que tenía mayoría (especialmente ayuntamientos) fue muy notorio.

La crisis estalló el 28 de octubre de 2001, cuando el embajador marroquí fue llamado a consultas en Rabat —no volvería hasta enero de 2003. Sin menoscabar la importancia de los gestos y de las declaraciones citados, no se puede entender esta crisis sin tener en cuenta la insistencia española en que cualquier solución al contencioso del Sáhara debía venir apoyada por ambas partes, rechazando así el Plan Baker I como solución. La oposición socialista criticó al Gobierno del PP por haber hecho de la relación con Marruecos, que había sido muy amistosa, un problema de primer orden, e intentó sacar partido de la crisis exhibiendo su buena sintonía con el Gobierno marroquí, el cual contribuyó a esta estrategia recibiendo a José Luís Rodríguez Zapatero con honores de jefe de Gobierno. El PP criticó severamente al Partido Socialista y, en especial, a sus líderes: José Luís Rodríguez Zapatero, entonces jefe de la oposición, cuando en diciembre de 2001 visitó Rabat, y Felipe González, quien en un viaje privado a Marruecos fue víctima de un bulo, inicial-

mente confirmado por fuentes diplomáticas españolas, que afirmaba que se había entrevistado con el rey y el primer ministro de Marruecos sin informar al Gobierno español (*El Mundo*, 25 febrero 2002). El PP reprochó a los socialistas haber roto el espíritu de consenso que caracterizaba a la política exterior española desde la transición¹⁵.

La crisis, como es sabido, llegó a su culminación con el incidente militar del islote de Perejil (del 11 al 20 de julio de 2002), ocupado sucesivamente por fuerzas armadas marroquíes y españolas, en el mayor incidente bilateral en el que participó la España democrática. El incidente selló la animadversión mutua entre Marruecos y Aznar y su partido¹⁶, y ejemplificó el cambio total de escenario que se había producido en 20 años. Los socialistas, temidos por el régimen marroquí por sus posturas prosaharauis antes de las elecciones de 1982, eran percibidos en 2002 como los valedores de Marruecos en la política española, mientras que los populares, sin haber apoyado abiertamente al Frente Polisario, habían desencadenado la peor crisis con el vecino del sur desde 1974. La prensa oficialista marroquí se encargó de pintar un retrato de Aznar como antimarroquí (y a la postre, dada su postura en la cuestión iraquí, antiárabe) reflejando una percepción extendida en el reino jerifiano.

El fin de la crisis todavía tardaría algunos meses. En el plano interno, el PP aprovechó el incidente para cortejar al voto nacionalista español mostrando su disposición a usar la fuerza para defender el territorio¹⁷, e intentó desgastar a los socialistas por su postura conciliadora con Marruecos, pese a que estos últimos apoyaron en el Congreso su acción militar en Perejil. En el plano diplomático, el Gobierno del PP se acercó a Argelia, volviendo a dinámicas propias de la política de *equilibrio*, y firmó un Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación (8 octubre 2002), inspirado en el firmado con Marruecos una década antes, y que, por lo menos teóricamente, elevaba a Argelia al mismo nivel de socio bilateral privilegiado que había tenido Marruecos¹⁸.

ZAPATERO EN EL GOBIERNO: NUEVO GOLPE DE TIMÓN

Al contrario de lo que pasó en 1982, en 2004 los socialistas querían marcar una inflexión respecto al Gobierno anterior en política exterior. El giro principal fue en relación con Irak¹⁹, pero la mejora de la relación con Marruecos ocupaba también un lugar de privilegio en la agenda exterior del PSOE. Los marroquíes, por su lado, no ocultaron su satisfacción por la elección de Zapatero, a quien el propio rey de Marruecos calificó de hombre “experimentado y sabio” (*Maroc Hebdo*, 19-25 marzo 2004). Siguiendo la

tradición de sus dos antecesores, también Zapatero empezó su andadura internacional con una visita a Marruecos. El Gobierno del PSOE anunció para el Magreb una política ya conocida: como 20 años antes, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, propuso una “visión global del Magreb, alejada del juego de las alianzas coyunturales”, centrada en los desafíos compartidos del terrorismo, los flujos migratorios y la creación de prosperidad. Para el Sáhara, el compromiso es “pasar de una política de neutralidad pasiva a una diplomacia activa”, sin alterar los principios fundamentales de España en la cuestión saharauí (diálogo entre las partes, legalidad internacional, no imposición, respeto al derecho de autodeterminación) (*ABC*, 27 julio 2007). En los primeros 100 días de gobierno, el presidente Zapatero visitó Marruecos y Argelia, el ministro de Exteriores y de Cooperación, Túnez y Argelia, y el secretario de Estado para Política Exterior Libia acudió a los campamentos de Tinduf.

Los mayores progresos se produjeron en la relación con Marruecos. A principios de legislatura la cuestión migratoria siguió siendo tensa, en especial a raíz de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla por parte de inmigrantes subsaharianos en otoño de 2005, pero Marruecos adoptó una actitud progresivamente más cooperativa. A la vez, la intensísima actividad diplomática bilateral dio sus frutos: envío de una unidad militar conjunta hispano-marroquí a Haití bajo bandera de Naciones Unidas; cooperación en el control de flujos migratorios; refuerzo de la cooperación militar; celebración de cumbres bilaterales (Reuniones de Alto Nivel, en terminología oficial) en Sevilla (29 de septiembre 2005), cuyo tema estrella fue la inmigración, y Rabat (5 y 6 de marzo 2007), centrada sobre todo en el Sáhara Occidental; organización de la Conferencia Ministerial Euro-Africana sobre la Inmigración y el Desarrollo en Rabat (10 y 11 julio 2006); anuncio de la construcción de un enlace fijo para 2025, etc.

La cuestión del Sáhara volvió a cobrar protagonismo a partir de mayo de 2005 con una serie de incidentes en la parte del territorio ocupada por Marruecos, donde manifestaciones y protestas saharauis fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad marroquíes. En los días siguientes todas las fuerzas parlamentarias, tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos, iniciaron un período de inusitado activismo con la preparación de visitas parlamentarias sobre el terreno. La primera de esas misiones fue expulsada del Sáhara el día 5 de junio de 2005, y lo mismo les sucedió a las nueve siguientes delegaciones autonómicas que intentaron la visita (*Anuario Internacional CIDOB*, 2005).

El Gobierno socialista multiplicó los contactos con las partes, sin lograr desactivar las críticas. Zapatero rehusó recibir en Madrid al líder del Polisario, el cual, en cambio, se entrevistó con Aznar (quien nunca le había recibido mientras estuvo en el Gobierno); el presidente argelino Bouteflika no recibió, por primera vez, a Miguel Ángel Moratinos cuando este visitó Argel en julio de 2005 para disipar los temores argelinos a un cambio de postura española; las asociaciones prosaharauis empezaron a exigir al Gobierno

mayor dureza con Marruecos por las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara; el Polisario criticó con dureza al ministro Moratinos por calificar en el Congreso de los Diputados a Marruecos como “potencia administradora” en el Sáhara (22 junio 2005). El activismo del Gobierno socialista hacia todos los actores (por ejemplo, enviando por primera vez a altos cargos a Tinduf) no le sirvió para desactivar la crítica, tan insistente como lo fue la crítica a los gobiernos González, por su cambio de posición en su política hacia el Sáhara Occidental.

Marruecos decidió retomar la iniciativa diplomática en la cuestión del Sáhara Occidental presentando un plan de autonomía que no contemplaba la autodeterminación del pueblo saharauí. Este plan, que no respetaba las *líneas rojas* declaradas repetidamente por la diplomacia española, fue presentado en febrero de 2007 al Gobierno español, quien advirtió de la necesidad de incluir una referencia a la autodeterminación. El plan fue presentado, de nuevo, por la parte marroquí en la Reunión de Alto Nivel de Rabat (5 y 6 de marzo de 2007), y fue acogido con ambiguas alusiones a la legalidad internacional (*El Mundo*, 6 marzo 2007). El propio ministro Moratinos calificó más tarde al plan de “elemento novedoso, de indudable interés”, que “podría generar una nueva dinámica de diálogo” (*El País*, 13 marzo 2007). La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, por su parte, consideró que “de momento” el Polisario mantiene “una posición muy cerrada con respecto a lo que pueda ser la propuesta marroquí” de autonomía para la zona. Tales declaraciones fueron muy negativamente acogidas por el Frente Polisario, cuyo delegado en España denunció la adherencia *peligrosa* del PSOE al plan marroquí (*Europa Press*, 8 abril 2007).

A pesar de sus permanentes desplazamientos a Argel, la capital extraeuropea que más veces ha visitado durante la legislatura, el ministro Moratinos no ha conseguido convencer a Argelia de que su estrategia no sea la de alinearse con Marruecos. La cuestión del gas ha vuelto a tener episodios conflictivos (aumento de precio, titularidad del gasoducto submarino Medgaz, contencioso sobre la explotación del yacimiento de Gassi Touil) en el trasfondo de una patente decepción argelina por la postura española en el dossier saharauí (Cembrero y Carcar, 2007).

En el plano interno, el PSOE debe afrontar, en primer lugar, la crítica directa de las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharauí, vinculadas con el Frente Polisario, que en abril de 2007 organizaron manifestaciones contra la postura del Gobierno. A ello hay que sumarle la presión de unas bases y unos cuadros intermedios socialistas fuertemente comprometidos con el pueblo saharauí y su autodeterminación. En tercer lugar, el resto de la izquierda y la mayoría de los grupos nacionalistas siguen apoyando de manera decidida la autodeterminación del pueblo saharauí, y mantienen contactos directos y visitas constantes a los campamentos de refugiados de Tinduf. Por último, la actitud de la derecha ha cambiado, ya que ha adoptado un discurso prosaharauí para erosionar a los socialistas en el poder. El Partido Popular criticó repetidamente el alineamiento del

Gobierno con Marruecos. En paralelo, efectuó un acercamiento a los movimientos de apoyo al pueblo saharauí, desencantados con el giro del PSOE en la cuestión saharauí. Así, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Madrid, 11 de noviembre de 2005), participó Jorge Moragas, diputado del PP, una presencia impensable unos años antes. Esa participación marcó un cambio importante de la que había sido la postura tradicional de la derecha en la cuestión del Sáhara (Camacho, 2007). En el Parlamento, el PP culpó a la política del Gobierno en el Sáhara de romper hasta el momento la línea diplomática española así como de la subida del precio del gas argelino (DSCD VIII-242: 12187).

En definitiva, pues, los esfuerzos del Gobierno socialista para mantener una posición de neutralidad con las dos partes en su renovado dinamismo diplomático hacia el Sáhara se ha saldado con un fracaso, y el Gobierno español ha pasado de una posición hostil con Marruecos en 2003 a una postura que los actores internacionales y domésticos identifican como de alineamiento con sus tesis, con la consecuente reacción adversa de Argelia.

CONCLUSIONES: EL PAPEL DE LA DIMENSIÓN PARTIDISTA

El Sáhara Occidental es una cuestión de alta carga política en España. Es un tema que suscita pasiones en la opinión pública, y no debe, por lo tanto, sorprender que los partidos políticos tengan una actitud combativa ni que sea usado para hacer oposición e intentar desgastar al Gobierno. Así ha sido desde 1975, con mayor o menor intensidad según los momentos. Sin embargo, la dinámica partidista no ha tenido siempre el mismo sentido. A grandes trazos, podemos afirmar que los partidos de ambos signos en el Gobierno han sido más moderados respecto a la cuestión saharauí de lo que fueron antes o después en la oposición. Ello se explica por la dificultad de gestionar la política hacia el Magreb sin generar grandes tensiones, y, sobre todo, de responder a la permanente presión marroquí, argelina y del Polisario. La defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharauí es un caso de política de principios, popular ante la opinión pública, pero complicada de llevar a cabo en la práctica diplomática del día a día. Así se explica que los partidos más constantes en su apoyo a la causa saharauí sean precisamente aquellos que nunca han tenido la responsabilidad del Gobierno estatal, como PCE/IU, PSUC/ICV, y la mayoría de partidos nacionalistas.

Hemos podido observar que la cuestión saharauí suscitó muy pronto un interés y unas dinámicas propias, pero que poco a poco se ha ido circunscribiendo a una visión

más global del Magreb. En el caso del PSOE, esta visión global es la que explica el cambio de postura. El Gobierno del PSOE modificó en 1982 sus postulados, como resultado de la mezcla entre la moderación obligada por el poder, las presiones marroquíes y los cambios en el entorno internacional de España, sobre todo la integración en el sistema euroatlántico (Lemus de la Iglesia, 2003). En 2004, el mismo PSOE se vio empujado por su nuevo activismo en el Magreb y su vivo interés en recuperar una buena relación con Marruecos (en parte, para marcar diferencias con el Gobierno anterior) a una postura promarroquí, incómoda para sus bases y en desacuerdo con los principios tradicionalmente mantenidos por el partido.

El Partido Popular y sus antecesores tenían posturas mucho menos definidas en cuanto a la cuestión del Sáhara. Por parte del nacionalismo español de derechas, el rechazo a la Argelia prosoviética y a un Polisario marxista se contraponían al recuerdo de las humillaciones sufridas a manos de Marruecos y el resentimiento por su constante reivindicación territorial. Ninguno de los contendientes era especialmente apreciado por este sector. Tampoco los sectores provenientes de UCD tenían mejor impresión de ambos lados, después de las dificultades que tuvo la política de equilibrio llevada a cabo por el Gobierno Suárez. La cuestión saharauí era percibida como una causa de izquierdas, con poca capacidad de movilización del electorado de centro-derecha. Fueron los reveses en la relación con Marruecos en el segundo Gobierno Aznar los que empujaron al PP, haciendo de la necesidad virtud, a una política más proargelina y, de paso, prosaharauí, en especial cuando esta postura se convirtió en un elemento para desgastar al PSOE en el poder.

En el discurso, los dos principales partidos mantienen posturas sobre el Sáhara que no sólo se parecen mucho entre sí, sino que son relativamente constantes en el tiempo y próximas a la que ha sido la postura oficial de España. Tras esos principios declarados se escudan permanentemente ambos partidos, que se acusan unos a otros de haber cambiado de postura, o de estar tergiversando los hechos. En las acciones, sin embargo, parece apuntarse un abandono progresivo de la política global que se intentó construir en los años ochenta, a favor de una política de equilibrios en la cual el PSOE quedaría más alineado con Marruecos y el PP con Argelia, justo al contrario de lo que pasaba 30 años antes. Las posturas hacia el Sáhara Occidental se adaptan progresivamente a ese nuevo paradigma. Los límites a esta adaptación están bien definidos. En el caso del PSOE, el Gobierno de Zapatero puede avanzar a pequeños gestos hacia posturas más conciliadoras con Marruecos, pero no deja de tener unas bases muy próximas a las tesis del Polisario. Ello limita fuertemente su margen de acción en el Gobierno (obligándole, como mínimo, a una acción compensatoria permanente hacia Argelia y el Polisario, de la que el PP pudo prescindir hacia Marruecos durante la crisis de 2001-2003), y reduce considerablemente los incentivos a mantener esa postura promarroquí en el caso de que el partido vuelva a estar en la oposición. En el caso del PP, sigue habiendo sectores del partido y afines (en particular empresariales) favorables al buen entendimiento con

Marruecos, y una postura de enfrentamiento excesivo con Rabat puede dar la imagen de un nacionalismo exacerbado que ahuyente a los sectores centristas. Para el PP, además, se da la paradoja de que la mayoría de las personas movilizadas a favor de la causa saharauí se hallan ideológicamente alejadas de este partido, de modo que los réditos potenciales en el plano electoral están principalmente circunscritos a la erosión del adversario. Por ello es difícil imaginar que, a la larga, el PP en el poder mantuviese una postura muy combativa en la cuestión saharauí.

En definitiva, la cuestión saharauí no es ya el prisma por el que se pueda interpretar la postura de los partidos políticos españoles hacia el Magreb árabe. Convencidos de la importancia de esa región para los intereses españoles, los dos principales partidos no diseñan su política hacia el Magreb en función del Sáhara, sino que adaptan, discreta y progresivamente, su discurso y, sobre todo, sus acciones respecto al Sáhara Occidental a una visión más amplia del Magreb y de las relaciones de España con Marruecos y Argelia. Sin embargo, una vez en el poder, estos partidos deben hacer frente a una opinión pública organizada y movilizadada en esta cuestión y a una oposición que, sin excepciones, la utiliza para desgastar al Gobierno. Por ello, para evitar este desgaste, y aunque los cambios de política vengan motivados por estrategias hacia Marruecos o Argelia, los partidos siguen apelando al respeto y apoyo absoluto a las acciones y decisiones de Naciones Unidas como justificación última de su postura.

Notas

1. El apoyo venía dado no sólo por la simpatía de ambos países por el régimen de Hassan II, sino también por el miedo a que una descolonización desordenada y un conflicto armado desembocasen en una segunda revolución de izquierdas en la península Ibérica, como la que había tenido lugar en Portugal meses antes (Powell, 1995: 29).
2. En especial de la resolución 1514 de la ONU sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que databa de 1960.
3. El discurso entero puede ser oído en la página web de la televisión de la RASD: <http://www.rasd-tv.com>
4. Según le cita en la tesis doctoral de ALGUERÓ CUERVO, José Ignacio. "El Sáhara Occidental en la Reciente Historia de España" UNED, 1998
5. Además de Ceuta y Melilla, la reivindicación marroquí incluye también los territorios menores como el islote de Alhucemas, las islas Chafarinas y el peñón Vélez de la Gomera. Para facilitar la lectura, consideramos a estos territorios deshabitados incluidos cada vez que hablemos de Ceuta y Melilla.
6. Más adelante, como veremos, Argelia usó otros dos ámbitos de presión: los contratos de suministro de gas y la cuestión de ETA.

7. El MPAIAC, liderado por Antonio Cubillo, reclamaba la independencia de las islas. Obtuvo en Argelia el tipo de apoyo a un movimiento de liberación nacional en el que se había especializado aquel Estado, pero jamás tuvo un apoyo significativo en el archipiélago. Una exitosa ofensiva diplomática española en África desactivó el riesgo de internacionalización, y la cuestión fue apartada en cuanto las relaciones mejoraron (Gillespie, 2000: 80-85; Marquina, 2000: 515-517).
8. Los marroquíes, no convencidos, optaron por llevar a cabo maniobras conjuntas con el Ejército estadounidense en Alhucemas en noviembre de 1982, frente a la costa mediterránea española. Esas maniobras probaban tanto la determinación de los marroquíes como el disgusto de la Administración Reagan con la visión socialista de las relaciones hispano-estadounidenses.
9. Las aguas saharauis eran denominadas eufemísticamente “aguas al sur del Cabo Nun”, pero su inclusión, vital para la flota pesquera española, fue interpretada por Marruecos como una victoria diplomática.
10. El 12 de noviembre de 1985 España votó a favor de la resolución presentada por Argelia reclamando conversaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario.
11. Que los doce votasen a favor del referéndum no era poca cosa, si tenemos en cuenta que los únicos miembros, además de España, que anteriormente habían votado en Naciones Unidas a favor del referéndum eran Grecia e Irlanda.
12. Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno Aznar (1996- 2000), sólo visitó Marruecos una vez, en contraste con las dos visitas al año que solían hacer sus antecesores.
13. La moción de censura contra Mustafá Aberchan, primer alcalde musulmán de Melilla, en julio de 2000, y las durísimas negociaciones pesqueras deterioran un clima bilateral ya enrarecido.
14. El 4 de septiembre de 2001 el rey Mohamed VI concedía una entrevista al periódico francés *Le Figaro*, en la cual muestra sin tapujos su enojo con el Gobierno español, explicitando que es Francia, y no España, el principal valedor marroquí en Europa (*Le Figaro*, 4-09-2001). La entrevista es la máxima ilustración del malestar marroquí con el Gobierno Aznar.
15. Esta crítica, vista en perspectiva, fue un irónico anticipo de la que sería una de las principales acusaciones contra la política de Aznar en Irak.
16. El incidente, además, selló el giro proamericano de Aznar (Estados Unidos fue el mediador que obtuvo el acuerdo para la retirada de tropas y el cese de hostilidades) y su enemistad con Francia (por sus dudas a la hora de apoyar a España, en especial en el momento de la ocupación militar española del islote), que serían claves para entender la actitud de su Gobierno en la crisis de Irak de 2002 – 2003.
18. En algunos lugares, los resultados fueron evidentes: después de una campaña electoral en la cual el vídeo de los soldados españoles izando la bandera española en Perejil cerraba el anuncio electoral del PP para Ceuta y Melilla, este partido obtuvo una amplia mayoría absoluta en ambas ciudades en las municipales de 2003.
19. El Tratado instituye para Argelia cumbres bilaterales de alto nivel con frecuencia anual. Ese es un privilegio que España reserva a sus principales socios europeos de España (Alemania, Francia, Italia y Portugal) y, desde 1991, a Marruecos.

20. La decisión del Gobierno del PP de participar en la coalición que ocupó Irak en 2003, enormemente impopular en España, fue uno de los elementos clave de la oposición del PSOE y, presumiblemente, de su victoria en las elecciones del 14 de marzo de 2004. En consecuencia, una de las primeras medidas adoptadas en política exterior fue la retirada de tropas españolas de ese país árabe.

Referencias bibliográficas

- AIXALÀ, Albert. "La política exterior española ante los retos de su politización: del consenso a la legitimidad". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*. No. 69 (mayo 2005). P. 89-105.
- ALGUERÓ CUERVO, José Ignacio. *El Sáhara Occidental en la Reciente Historia de España*. Tesis Doctoral. UNED, 1998.
- AAVV 2006 *Anuario CIDOB 2005*. Barcelona: Fundación CIDOB.
- BARBÉ, Esther. "De la ingenuidad al pragmatismo: 10 años de participación española en la maquinaria diplomática europea". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* No. 34-35 (1996). P. 77-96.
- CAMACHO, Ana. "Zapatero, a la caza de una foto con el Polisario". *GEES Colaboraciones*. No. 1712 (23 de mayo de 2007) [en línea]. Madrid: GEES. [Consulta: 27 de agosto de 2007]. <http://www.gees.org/articulo/4037>
- CEMBRERO, Ignacio y CARCAR, Santiago. "Luz al final del 'túnel' energético con Argelia". *El País* (30 julio 2007). P. 68.
- DEL PINO, Domingo. "Conflicto del Sáhara: Autodeterminación o confrontación". *Estrategia del Mediterráneo Occidental y del Magreb*. Madrid: Instituto de Cuestiones Internacionales, 1983. P.125-133.
- Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSCD). Comisiones Informativas, I Legislatura, No. 6, de 18/09/1979. Comisión de Asuntos Exteriores.
- DSCD. Pleno, I Legislatura, No. 143, de 18/02/1981 *Investidura del Presidente del Gobierno*
- DSCD. Comisiones Informativas, II Legislatura, No. 11, de 18/02/1983 comisión de asuntos exteriores.
- DSCD. Pleno, II Legislatura, No. 66, de 26/10/1983 *Debate sobre la comunicación del Gobierno en materia de política exterior*
- DSCD. Pleno, VIII Legislatura, No. 242, de 21/03/2007 *Sesión plenaria No. 224*
- GILLESPIE, Richard. *Spain and the Mediterranean. Developing a European Policy towards the South*. London: MacMillan, 2000.
- GRIMAUD, Nicole. "Sahara occidental: une issue possible?". *Monde Arabe Magreb Machrek* No. 121 (julio-septiembre 1988). P. 89-98.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel. *La política exterior de Marruecos*. Madrid: MAPFRE, 1997.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y NÚÑEZ VALVERDE, Jesús. *La política exterior y de cooperación de España en el Magreb*. Madrid: Los Libros de la Catarata, 1996.
- LEMUS DE LA IGLESIA, Uxía. "Los elementos constituyentes de la nueva política exterior y de seguridad de España hacia Marruecos (1976-2002)". *Paix et Sécurité Internationales*. No. 1 (2003). P. 345-372.

- LÓPEZ GARCÍA, Bernabé y HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel. "El Sáhara Occidental, obstáculo en la construcción magrebí". *Documentos de Trabajo*. No. 15 (23 marzo 2005). Madrid: Real Instituto Elcano.
- MARQUINA, Antonio. "Las relaciones de España con los estados del Magreb 1975-1986". En: TUSELL, J., AVILÉS, R. y PARDO, R. (eds.) *La política exterior de España en el siglo XX*. Madrid: UNED, 2000. P. 511-546.
- MESA GARRIDO, Roberto. "Una visión española del Mediterráneo Árabe". En: CESEDEN (ed.) *Diálogo Mediterráneo, Percepción Española*. Madrid: Ministerio de Defensa, 2001. P. 145-180.
- MORÁN, Fernando. *España en su sitio*. Barcelona: Plaza-Janés/Cambio 16, 1990.
- MORATINOS, Miguel Ángel. "Política exterior y de cooperación con el Magreb". *Informativo de la Dirección General de África y Oriente Medio*. No. 8 (septiembre 1991).
- OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. "Contestación formulada por el Ministro de Asuntos Exteriores a la pregunta del diputado del grupo parlamentario popular, don Santiago López González (BOCG,5-5-83)". *Actividades, Textos y Documentos de Política Exterior Española*. No. 29 (1983). P. 499-503.
- POWELL, Charles. "Spain's External Relations 1898-1975". En: GILLESPIE, Richard; RODRIGO, Fernando y STORY, Jonathan. *Democratic Spain: reshaping external relations in a changing world*. London: Routledge, 1995. P. 11-29.
- URRUELA, Águeda. "El Parlamento Europeo frente al conflicto del Sáhara Occidental". *Papers* No. 46 (1995). P. 104-120.
- VAQUER i FANÉS, Jordi. *Spanish Policy Towards Morocco (1986-2002); the impact of EC/EU membership*. Tesis Doctoral, London School of Economics and Political Science, University of London, 2004a. – "The European Union and Western Sahara". *European Foreign Affairs Review*. Vol. 9 No. 2 (primavera de 2004b).